

5.^a SESION DE PRORROGA DEL 8 DE OCTUBRE DE 1881

PRESIDENCIA DEL SEÑOR FRANCISCO B. MADERO

SUMARIO: I.—Despacho de Comisión.

II.—Consideración del despacho de la Comisión de Legislación en el mensaje del Poder Ejecutivo sometiendo á la consideración del Congreso el decreto por el que se organizó el Consejo Nacional de Educación.

III.—Se pasa á la Comisión de Poderes para que se expida el diploma del senador electo por Salta Moisés Oliva.

IV.—Continúa la consideración del asunto del número II, aprobándose el despacho con modificaciones.

V.—Se posterga la consideración del asunto del número III.

Señores senadores

Argento
Baibiene
Baltoré
Bárcena
Barros
Bayo
Carrillo
Civit
Dávila
Del Valle
Febre
Figueroa
Gelabert
Gómez
Igarzábal
Lucero
Moyano
Navarro
Ortiz
Pellegrini
Rodríguez
Santillán
Villanuova

En Buenos Aires, á ocho de Octubre de mil ochocientos ochenta y uno, reunidos en su sala de sesiones, el señor Presidente y los señores senadores al margen inscriptos, se abrió la sesión con inasistencia de los señores Frías, Paz y Padilla, ausentes de la Capital con licencia.

Leída y aprobada el acta de la anterior, de seis del corriente (4.^a de prórroga), se dió cuenta del siguiente

I

DESPACHO DE COMISIÓN

Abriendo un crédito suplementario al Departamento de Hacienda por pesos fuertes veinte mil.

—A la orden del día.

II

Sr. Presidente—Se va á pasar á la orden del día.

Honorable señor:

Vuestra Comisión de Legislación, ha tomado en consideración el decreto del Poder Ejecutivo fecha 28 de Enero del corriente año, que creó el Consejo Nacional de Educación; y, por las razones que os dará el miembro informante tiene el honor de aconsejaros le prestéis vuestra aprobación al adjunto proyecto.

Sala de comisiones, Buenos Aires, Septiembre 30 de 1881.

A. del Valle—Francisco J. Ortiz.

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1.º Apruébase el decreto del Poder Ejecutivo, fecha 28 de Enero del corriente año, que creó el Consejo Nacional de Educación y que continuará rigiendo con las siguientes modificaciones:

- 1.ª El Consejo Nacional de Educación á que se refiere el artículo 4.º de dicho decreto se compondrá de un superintendente general, que disfrutará del sueldo que la ley de Presupuesto le asigne y de seis consejeros cuyos servicios serán gratuitos.
- 2.ª La inspección de la educación común en el distrito de la Capital, en los territorios nacionales y en las provincias, en cuanto se relaciona con las leyes del Congreso, estará á cargo de dos inspectores generales con residencia en la Capital y un subinspector en cada provincia, cuyos deberes y atribuciones será el que determina el Consejo Nacional de Educación. Los inspectores y subinspectores deberán ser nombrados por el Poder Ejecutivo á propuestas del superintendente general, y necesariamente deberán ser maestros normales.
- 3.ª Créase una Oficina de Estadística de la educación común en toda la República, bajo la dirección del superintendente general con el personal de empleados que la ley de Presupuesto determine.
- 4.ª El Consejo Nacional de Educación funcionará bajo la presidencia del superintendente general y se dará su propio reglamento.
- 5.ª Todos los empleados á sueldo del Consejo Nacional de Educación deberán concurrir á su oficina y permanecer en ella durante las horas del servicio.

Art. 2.º Continuarán percibiéndose por el Consejo Nacional, con destino al sostenimiento de la educación común en la Capital, las rentas que le estaban asignadas por la ley de 16 de Septiembre de 1876, y demás disposiciones vigentes en la Provincia de Buenos Aires en la fecha en que este municipio fué declarado Capital de la República.

Art. 3.º A los objetos de la subvención nacional acordada á las provincias por la ley de 25 de Septiembre de 1871, para el pago de salarios á los maestros, el Poder Ejecutivo fijará previo informe del Consejo Nacional de Educación, una escala graduada de sueldos, con relación á la situación de las escuelas y al número de niños que en ellas se educuen.

La subvención se acordará con arreglo á esta escala, y se abonará directamente á los maestros de escuela, previas las notificaciones necesarias, por intermedio del empleado ó empleados nacionales que el Poder Ejecutivo determine.

Art. 4.º La subvención para compra de mobiliarios, libros y útiles á que se refiere la ley de 25 de Septiembre de 1871, no se acordará sino en el caso en que la compra de esos artículos se practicara por intermedio del Consejo Nacional de Educación y cuando á juicio de este su clase y cantidad fuese proporcional y adecuada á las necesidades de la educación de la provincia de que se trate.

Art. 5.º Queda derogado el artículo 7.º de la ley de 25 de Septiembre de 1871 y todas las disposiciones que se opongan á la presente.

A. del Valle—Francisco J. Ortiz.

El Poder Ejecutivo Nacional.

Buenos Aires, Agosto 16 de 1881.

Al honorable Congreso de la Nación.

Tengo el honor de someter á la consideración de Vuestra Honorabilidad el decreto que, en el receso de vuestras sesiones, expidió el Poder Ejecutivo con fecha 28 de Enero último, declarando en vigencia, para el régimen escolar de la Capital, la ley provincial de 26 de Septiembre de 1876, y organizando, en consecuencia, el Consejo Nacional de Educación, como mecanismo propio de esta ley, y como ventajosa substitución de la antigua Comisión Nacional, á que se refiere la ley de 25 de Septiembre de 1871.

Proveer interinamente al gobierno escolar de la Capital, hasta tanto Vuestra Honorabilidad dicte la ley de educación común que ha de regir en ella, reunir en un solo departamento, con mayor economía para el tesoro público, y con ventajas evidentes de la educación, la administración de los establecimientos de esta clase, que la Nación sostiene ó subvenciona en las provincias, colonias y territorios nacionales, y preparar, finalmente, el camino á una legislación común en esta materia, y en los términos que expresa la Memoria del Ministerio de Instrucción Pública, tales fueron los motivos determinantes de aquel acto del Poder Ejecutivo, que vengo hoy á someter á vuestra deliberación.

La adjunta nota del superintendente general de educación, demuestra que no le ha sido posible preparar, en el breve tiempo que le fué acordado, el proyecto de ley á que se refiere el artículo 19 del citado decreto. Aparte de que ese proyecto, presentado á Vuestra Honorabilidad en las actuales sesiones, no alcanzaría á obtener sanción definitiva en ambas cámaras, dado el cúmulo de importantes asuntos que de preferencia reclaman su atención, y el corto tiempo que aun resta de sesiones, el superintendente general observa que un proyecto de esta clase, destinado á servir de base á la educación común en toda la República, no puede intentarse sin ciertas medidas previas que preparen la materia de la ley, y pongan al alcance de Vuestra Honorabilidad gran número de datos indispensables para el acierto de la sanción que se proyecta.

Estas consideraciones, harto evidentes de suyo, han decidido al Poder Ejecutivo á someter á vuestra deliberación el mencionado decreto, esperando quiera Vuestra Honorabilidad acordarle provisoria sanción legislativa.

El Poder Ejecutivo se persuade que es altamente conveniente conservar la actual organización del Departamento escolar de la Capital, y con ella la del Consejo Nacional de Educación, que, aunque no en la medida que pudo esperarse, comienza á dar los resultados que se tuvieron en vista al proyectarla y ponerla interinamente en vigencia; pero si, á pesar de todo, creyese Vuestra Honorabilidad no deber con-

Octubre 8 de 1881

CAMARA DE SENADORES

5.ª sesión de próroga

servarla, podría entonces quedar á cargo de la Municipalidad de la Capital el Departamento escolar de la misma, interin se dicta la ley de educación común para toda la República.

Dios guarde á Vuestra Honorabilidad.

JULIO A. ROCA.

M. D. PIZARRO.

Ministerio de Justicia, Culto é Instrucción Pública.

Buenos Aires, Enero 28 de 1881.

Por cuanto:

Es urgente proveer al gobierno de las escuelas de la Capital para no dañar á la educación común por la interrupción de los cursos escolares y

CONSIDERANDO:

- 1.º Que mientras el honorable Congreso no dicte la ley de educación que ha de regir en el territorio federalizado, corresponde al Poder Ejecutivo adoptar las medidas conducentes al régimen y administración de sus escuelas, tanto más, cuanto que la ley nacional de 21 de Septiembre último, le autoriza suficientemente para adoptar las medidas y hacer los gastos que su ejecución demande.
- 2.º Que es conveniente conservar entretanto las disposiciones escolares que han estado en vigencia, en cuanto ellas sean adaptables y compatibles con el gobierno constitucional de la Capital.
- 3.º Que es igualmente conveniente y económico reunir en un solo departamento la administración de los establecimientos de educación á que la Nación provee directamente ó por subvenciones del Tesoro Nacional.

POR TANTO:

El Presidente de la República

DECRETA:

Artículo 1. Interin el honorable Congreso provee por una ley especial á la educación común en el territorio de la Capital, continuarán vigentes en ellas las instituciones escolares de la Provincia, con las modificaciones que establece el presente decreto.

Art. 2.º El Departamento de la Capital formará un sólo distrito escolar, quedando por lo tanto sin efecto las disposiciones del párrafo 4.º del capítulo 2.º de la ley provincial de 26 de Septiembre de 1876 y demás disposiciones esparcidas en el cuerpo de ellas que se relacionan con las funciones escolares del distrito.

Art. 3.º Créase un Consejo Nacional de Edu-

cación á cuyo cargo estará la dirección facultativa y la administración general del distrito escolar de la Capital, con arreglo á las disposiciones de la citada ley.

Art. 4.º El Consejo Nacional de Educación se compondrá de un superintendente general, presidente del mismo, y de ocho vocales, que serán inspectores de educación nombrados por el Poder Ejecutivo y rentados con los fondos del Tesoro Nacional.

Art. 5.º Mientras el honorable Congreso designe los sueldos que deberán gozar los miembros del Consejo y empleados de su secretaría quedan estos fijados en el modo y forma siguiente:

Superintendente, sueldo mensual...	\$ f.	500
Ocho vocales inspectores de educación á 250 \$ f. cada uno.....	»	2.000
Secretario	»	250
Prosecretario	»	200
Contador Mayor.....	»	200
Dos contadores auxiliares á 150 cada uno.....	»	300
Un bibliotecario y archivero.....	»	120
Un oficial 1.º.....	»	120
Tres escribientes á pesos fuertes 60 cada uno.....	»	180
Un mayordomo	»	40
Un portero	»	20

Art. 6.º El Consejo Nacional de Educación se hará cargo de todos los fondos, útiles y pertenencias del Departamento escolar de la Capital, dando cuenta de ello al Ministerio de Instrucción Pública con el correspondiente informe.

Art. 7.º El Presidente del Consejo con acuerdo de éste procederá inmediatamente á proyectar para el municipio de la Capital, la construcción de edificios para escuelas bajo un sistema completo, que responda á las necesidades de la población, según su densidad, á cuyo efecto elegirá los terrenos de propiedad pública ó particular en que convenga construir los edificios; determinará en un plano del municipio, la ubicación de los terrenos elegidos y hará trazar por un arquitecto competente en esta clase de construcciones, los planos y presupuestos de las escuelas que sea necesario edificar. Proyectará asimismo la adquisición ó construcción de un edificio apropiado para el más pronto establecimiento de una Escuela de artes y oficios que responda á las necesidades industriales del país, pudiendo elegirlo entre los de propiedad pública que puedan ser adaptados al efecto.

Art. 8.º La contaduría del Consejo Nacional de Educación abrirá una cuenta especial al distrito escolar de la Capital, la que arrancará con el haber que le corresponda por liquidación de fondos con la administración escolar de la provincia.

Art. 9.º Quedan bajo la dirección facultativa y administración general del Consejo Nacional de Educación, las escuelas de las colonias y territorios nacionales á las que proveerá el consejo por medio de sus inspectores y con los fondos del Tesoro Nacional destinados á la educación común en ellas.

Art. 10. Queda también á cargo del Consejo, el fomento de las escuelas que las provincias sostienen por subvenciones nacionales; y sus atribuciones son las conferidas á la Comisión nacional de educación, por la ley de 25 de Septiembre de 1871 y demás disposiciones vigentes.

Art. 11. Queda en consecuencia suprimida, la Comisión nacional de educación, dándose las gracias á nombre del Gobierno á los que actualmente la componen por los importantes servicios que han prestado al país en ese destino.

Art. 12. El Consejo Nacional de Educación arbitrará las disposiciones convenientes para garantizar la fiel inversión de los fondos que se distribuyen á las provincias en virtud de la ley de subvenciones á la educación común y las propondrá al Ministerio de Instrucción Pública, para su adopción.

Art. 13. Se elevarán por conducto de Consejo y se despacharán con su informe, todos los expedientes ó gestiones sobre construcción y reparación de edificios para escuelas en las provincias, colonias y territorios nacionales, adquisición de mobiliario, material científico, pago de sueldos y demás gastos á cargo del Tesoro Nacional.

Art. 14. La contaduría del Consejo abrirá una cuenta general á las escuelas subvencionadas de las provincias y á las de las colonias y territorios nacionales bajo la denominación de «Educación Común de la Nación» cuyo haber lo formarán las rentas votadas á este efecto en el Presupuesto General.

Art. 15. Quedan asimismo á cargo del Consejo, la Biblioteca Nacional y el fomento de las bibliotecas populares, con arreglo á las disposiciones vigentes, cuyos gastos se cargarán á la cuenta general de que habla el artículo anterior.

Art. 16. El Consejo funcionará diariamente en un edificio apropiado, al que se trasladará la Biblioteca Nacional y el archivo de la extinguida Comisión nacional de educación, recibiendo de ellos bajo el correspondiente inventario, de que dará cuenta al Ministerio y dispondrá la conservación bajo inventario del material científico que se adquiriera para proveer á los establecimientos de educación, el que estará á su cargo y del que deberá llevar prolija cuenta con expresión de las adquisiciones que se hagan y del destino que ellas reciban.

Art. 17. Los miembros del Consejo ejercerán la inspección de los establecimientos de educación en el territorio de la Capital, en las provincias, colonias y territorios nacionales periódicamente y según las necesidades públicas lo requieran, no pudiendo ausentarse á la vez más de cuatro inspectores á fin de que el Consejo pueda funcionar diariamente.

Art. 18. Queda en consecuencia derogado el decreto de Febrero 20 de 1879 que crea cuatro inspectores de instrucción primaria en las provincias.

Art. 19. El Presidente del Consejo presentará á principios de Abril un informe especial y detallado sobre el estado de la educación en el territorio de la Capital, que comprenda la estadística de la enseñanza primaria en ella, métodos y plan de estudios vigentes, con las reformas que sean necesarias introducir y el

proyecto de ley de educación que ha de presentarse al honorable Congreso.

Art. 20. El Consejo dictará su reglamento interno y lo presentará al Ministerio de Instrucción Pública para su aprobación, pudiendo interinamente adoptar el de la extinguida Comisión Nacional ó el del Consejo Superior de Educación de la Provincia con las consiguientes modificaciones.

Art. 21. Comuníquese, publíquese y dése al Registro Nacional.

Firmado—

ROCA.

D. M. PIZARRO.

Sr. Del Valle—Pido la palabra, señor Presidente.

Federalizada la ciudad de Buenos Aires, y pasando su administración al Gobierno de la Nación, el Poder Ejecutivo se encontró con el régimen de escuelas establecido en este municipio bajo el imperio de la Ley de educación común de 1876. Tenía necesidad de resolver cuál era la situación en que las escuelas de la Capital debían continuar hasta tanto que el Congreso, llamando á sí este delicadísimo asunto, dictara las leyes que creyera más conducentes al desenvolvimiento de la educación pública que tan hondamente afecta al gobierno representativo republicano.

El Poder Ejecutivo, según los informes que ha recibido la Comisión y los documentos que se han publicado, creyó, como era natural, que lo que convenía en esa situación transitoria, era mantener las cosas tales cuales se hallaban constituidas en el municipio en la época en que pertenecía á la Provincia de Buenos Aires. Y así se ve que el decreto que se acaba de leer, declara en vigencia para las escuelas comunes de este municipio la Ley de educación común que las gobernaba hasta el momento de federalizarse.

Pero, al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo encontraba funcionando otra Comisión de educación nacional, creada por ley anterior y que desempeñaba funciones análogas respecto de los demás pueblos de la República, y consideró conveniente y económico refundir estas dos administraciones en el mismo Consejo de Educación.

El Poder Ejecutivo hizo pocas variaciones en el gobierno de las escuelas. En el personal directivo de la educación, conservó un Superintendente de

escuelas, que en la ley de la Provincia llamábase Director general de escuelas, y un Consejo compuesto de ocho miembros, que era el mismo que existía en la Provincia, modificando sólo la compensación, en atención, quizás, á la mayor suma de atribuciones que le conferiría, puesto que extendía su jurisdicción á toda la República y á las nuevas obligaciones que imponía á los consejeros que, por el decreto del Poder Ejecutivo, además de miembros del Consejo, son inspectores de la educación nacional en toda la República, suprimiéndose los inspectores que prestaban este servicio.

La Comisión, en el estudio de este asunto, ha encontrado que el Poder Ejecutivo procedió como debía, al poner en vigencia la ley de educación de la Provincia hasta tanto que el Congreso se reuniera y resolviera lo que creyera más conveniente.

En cuanto á las modificaciones puramente de detalle y de orden interno y administrativo que el decreto introducía en el régimen de la educación pública, ha pensado que cualesquiera que sean las opiniones que se tengan á su respecto, en ningún caso pueden motivar una resolución desaprobatoria, tanto más cuanto que ninguna de ellas altera fundamentalmente la institución.

Por eso es que en su despacho, la Comisión aconseja primero que se apruebe el decreto del Poder Ejecutivo, y después que continúe en vigencia en adelante con las modificaciones que se expresan: modificaciones todas que responden á conveniencias de la administración en este Departamento del Gobierno.

Puedo anticipar á la Cámara, reservándome discutir cada una de ellas en particular, que todas estas modificaciones han sido aceptadas por el señor Ministro de Instrucción Pública, que ha representado al Ejecutivo en el seno de la Comisión, y también por el señor Superintendente general de escuelas; que ha sido llamado á su seno para conocer su opinión tan ilustrada en esta materia.

Bueno es que la Cámara tenga presente que la ley que se trata de sancionar y la misma Ley de educación de la Provincia que se pone en vigencia, tienen un carácter transitorio.

El Poder Ejecutivo ha encomendado

al Superintendente de escuelas la preparación de una ley general de educación, y, según los informes recibidos por la Comisión del señor Ministro y del mismo Superintendente, ese proyecto deberá ser pasado al Poder Ejecutivo y por este al Congreso en los primeros meses del año próximo.

Con estos antecedentes se explica que la Comisión no haya tocado el fondo de la ley, y la situación creada por leyes anteriores sino en aquello que ha considerado indispensable para el buen gobierno de la educación pública.

Sr. Argento—Tengo necesidad de decir aunque sean cuatro palabras para fundar mi voto en contra del proyecto en general que forma la orden del día, consecuente siempre con las ideas manifestadas en esta Cámara respecto á que las resoluciones de los poderes públicos deben estar limitadas por las atribuciones que están asignadas en la Constitución Nacional.

Creo que esta forma en que se ha presentado el proyecto es irregular y que el Congreso no puede aprobar un decreto en que el Poder Ejecutivo ha usurpado funciones que son del resorte del Poder Legislativo.

El Poder Ejecutivo, por la Constitución, tiene la facultad de convocar extraordinariamente al Congreso para discutir leyes que interesan al orden público, cuando un motivo grave lo requiere, pero ni la urgencia, ni la necesidad pueden autorizar á un poder para arrogarse atribuciones del otro, sobre todo cuando ya la Constitución prevé el caso y dice qué es lo que debe hacer cuando haya una necesidad que llenar, es decir, que el Ejecutivo convoque al Poder Legislativo, para que éste dé las leyes; de modo que el Gobierno, por medio de un decreto no se tome las atribuciones de hacerlas, porque únicamente él puede, por medio de decretos, reglamentar el cumplimiento de leyes preexistentes.

Es indudable, como se ha dicho, que en la ley capital hay un artículo que dice, en general, que el Poder Ejecutivo adoptará las medidas necesarias para hacer efectivas las leyes, pero sin darle facultades expresas al respecto y sin darle tampoco una autoridad omnimoda para que se tome las atribuciones del Poder Legislativo.

No creo que ése es el alcance de la disposición, y aun cuando lo fuera, yo no sería inconsecuente con mis ideas, porque ya estuve en contra de la ley capital que se ha puesto en vigencia, y, por consecuencia, en contra de ese artículo á que me he referido.

Por eso daré mi voto en contra del proyecto en general y de todos y cada uno de los artículos en particular

—Se vota en general el proyecto y resulta afirmativa.

—Se pone en discusión particular el artículo 1.^o

Sr. Civit—Estoy de acuerdo con la doctrina manifestada hace un momento por el señor Senador por Santa Fe al negar al Poder Ejecutivo la facultad de dictar leyes con asignación de sueldos y creación de empleos, pero no me parece que sea el remedio, señor Presidente, para evitar este abuso del Poder Ejecutivo, votar en contra de una ley que es útil y necesaria. Me parece que sería otro el camino á adoptar

Si el Poder Ejecutivo hace uso de facultades que la Constitución no le concede, está en manos del Congreso proyectar resoluciones y votos de censura para detenerle en un camino que indudablemente es pernicioso si lo hubiera de seguir con frecuencia.

Yo no propongo nada á este respecto, señor Presidente, pero sí voy á permitirle pedir á la honorable Cámara que modifique el artículo 7.^o en el sentido, no de prestar su aprobación, como lo pide en su introducción, sino de darle una redacción que importe no aprobar el decreto del Poder Ejecutivo y sí dejar subsistentes las modificaciones que la Comisión propone á la ley de educación común.

En consecuencia, señor Presidente, yo me permito solicitar de la Cámara que para el artículo 1.^o acepte esta resolución: «El Consejo Nacional de Educación, creado por el Poder Ejecutivo por decreto de fecha 28 de Enero del corriente año, continuará rigiendo con las siguientes modificaciones.»

De esta manera no aprobamos un decreto creando empleos, que importa el uso de atribuciones que no le están conferidas al Poder Ejecutivo, aceptamos las modificaciones que propone la Co-

misión sobre esta ley y procedemos con la suavidad más bien calificada que puede emplear el Senado para desaprobar un acto del Poder Ejecutivo.

No creo, por otra parte, que se perjudique el proyecto mismo al suprimir las palabras que tiene el artículo 1.^o, aprobatorias de este decreto.

Si esta indicación no fuera aceptada, pediré que se vote el artículo para votar en contra.

Sr. Secretario—La forma en que ha dictado el señor Senador por Mendoza el artículo es ésta:

«El Consejo General de Educación, creado por decreto de fecha 28 de Enero de este año, continúa rigiendo con las siguientes modificaciones», etc.

Sr. Gómez—Me encuentro en el mismo orden de ideas que los señores senadores por Mendoza y Santa Fe sobre la falta de facultades en el Poder Ejecutivo para crear estos empleos y asignarles sueldos, pero creo que el Senado, en este caso, debe manifestar su opinión á este respecto con toda franqueza, y decir, donde dice: «Apruébase el decreto», «desapruébase el decreto», y, en seguida establecer la manera cómo debe estar formado el Consejo.

Aceptaría la modificación del señor Senador por Mendoza, pero diciendo clara y francamente el Senado que desaprueba el decreto.

Sr. Pellegrini—Creo que no puede haber dudas respecto á la teoría iniciada por el señor Senador por Santa Fe de que el Poder Ejecutivo no puede dictar leyes. No creo que jamás venga tal cuestión al Senado para discutirla. Son afirmaciones que se hacen para probar un celo ardiente por la Constitución y sus principios, pero no rigen en el presente caso ni esas teorías ni esas prescripciones constitucionales.

La ley declarando Capital de la República á la ciudad de Buenos Aires autorizó al Poder Ejecutivo para hacerse cargo de todos los servicios que pasaron á ser nacionales, y, como es consiguiente, para organizarlos.

Así, pues, todos los decretos que el Poder Ejecutivo ha dado sobre los distintos ramos de la administración son en virtud de leyes del Congreso.

Donde creo que el Poder Ejecutivo ha ultrapasado sus facultades es en los detalles.

Octubre 8 de 1881

CAMARA DE SENADORES

5.ª sesión de prórroga

Se recibe de la Policía, de la Municipalidad, del Consejo de Educación y de varios otros departamentos de la Provincia y altera su administración cuando la autorización al Poder Ejecutivo sólo alcanzaba á continuar la administración provincial bajo la autoridad nacional por medio de un decreto, pero en manera alguna á alterar esa administración con el objeto de aumentar el número de empleados, los sueldos y hacer mayores gastos.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo, en todos sus decretos, comete esa falta.

El Consejo de Educación para toda la Provincia de Buenos Aires, incluso la Capital y la campaña, estaba á cargo de un superintendente, de un director general y de ocho consejeros que tenían un sueldo: los consejeros de ciento cuarenta patacones, el superintendente de cuatrocientos, el Poder Ejecutivo dictó un decreto y nombró ocho consejeros, les aumentó el sueldo á doscientos cincuenta patacones y les agregó las funciones de inspectores, haciendo una confusión inexplicable entre el cargo de consejero director é inspector subordinado, creando un cargo imposible, porque es materialmente imposible ser consejero en Buenos Aires é inspector en el interior al mismo tiempo.

Creo que el Senado, cuando el Poder Ejecutivo le dé cuenta de todas las medidas que ha adoptado en virtud de esa ley, puede modificar ó desaprobar la parte en que considere que se haya excedido de las atribuciones conferidas y que su simple silencio bastará para que importe una desaprobación tácita de los decretos dictados.

Así es que creo que respecto á la forma en que está redactado el decreto, la resolución del Senado poca importancia tiene.

No se trata de aprobar ó desaprobar en general un acto del Poder Ejecutivo, hecho en virtud de una ley del Congreso, sino de modificar el decreto en aquella parte en que el Senado crea que no han sido bien consultados los intereses públicos con las restricciones y ampliaciones que indica la Comisión.

Por estas razones, voy á votar por el proyecto de la Comisión tal cual está, sin que esto importe, en manera alguna, aceptar la teoría de que el Poder Ejecutivo puede dar leyes por medio de decretos, sino simplemente con la idea

de modificar el decreto en aquella parte en que se considere que el Poder Ejecutivo se ha excedido en las facultades conferidas, porque creo que se ha excedido en todo aquello que importa aumentar el número de empleados y gastos que la Provincia hacía para atender á la administración y que ha debido limitarse únicamente á darle un carácter nacional por medio de un decreto y continuar provisoriamente manteniendo en vigencia las leyes provinciales hasta que el Congreso dictaminare la forma y modo en que debieron continuar.

Sr. Del Valle—Coincido con las opiniones manifestadas por el señor Senador por Buenos Aires respecto de las facultades constitucionales de los poderes públicos, materia, por otra parte, que, como él lo ha dicho, no reclama más extensa discusión en el seno de este Cuerpo.

En cuanto á la aprobación ó desaprobación del decreto y á la aplicación de esas reglas fundamentales de gobierno al caso que nos ocupa, me permito observar que el Poder Ejecutivo no ha creado empleados y que ha mantenido los mismos que existían en el Consejo Provincial de Educación. Un director general y ocho consejeros, cambiándole el nombre al director y llamándole superintendente.

En cuanto á los sueldos, es cierto que son mayores los que estos consejeros disfrutaban que los que antes tenían como miembros del Consejo de Educación de la Provincia, pero lo es también que se han refundido en estos consejeros las funciones que estaban atribuídas á los inspectores nacionales de educación.

Sr. Figueroa—¿La inspección es atribuída por ley nacional?

Sr. Del Valle—No, señor. Es el decreto del Poder Ejecutivo que refunde las funciones de inspectores del Consejo; las funciones de inspectores y su creación tienen por origen el decreto de 29 de Febrero de 1879.

Sr. Figueroa—Que el Congreso no apruebe, y, sin embargo, el Poder Ejecutivo contra la voluntad del Congreso, ha creado y mantenido esos inspectores.

Sr. Del Valle—Me parece que no se trata de los inspectores que el Congreso

ha suprimido del Presupuesto, sino de la Inspección de Escuelas fundada en la ley de subvenciones.

Decía, señor Presidente, que se explicaba el aumento de sueldo por el aumento de obligaciones y deberes.

Ahora pregunto: ¿Existe la imposibilidad que el señor Senador por Buenos Aires marcaba para que los consejeros sean al mismo tiempo inspectores de la educación? Creo que sí, y á esto me refería cuando hablaba de la divergencia de opiniones que puede existir y existe en realidad respecto de la inconveniencia de algunos de los detalles del decreto del Poder Ejecutivo, pero sea dicho en honor á la verdad que el mismo Poder Ejecutivo había previsto en esta parte la dificultad, pues había dispuesto que siempre permanecieran en la ciudad de Buenos Aires cuatro de los consejeros inspectores mientras los otros cuatro hacían su visita de inspección alternándose sucesivamente en el servicio.

Digo esto para restablecer la verdad de los hechos y dejar las cosas en su lugar, sin desconocer que hay inconveniencia en que estas funciones se acumulen en los directores generales de educación, á que los inspectores deben estar subordinados.

Ahora, viniendo á la cuestión de fondo relativa á la aprobación ó desaprobación del decreto, debo observar que la ley de Capital autorizaba al Poder Ejecutivo para todos los arreglos concernientes á la nueva situación creada por ella.

Como he dicho antes, entre los asuntos que primero se presentaban á la consideración del Poder Ejecutivo figuraba el de la educación pública.

El Poder Ejecutivo creyó, interpretando la ley de Capital, que podía aplicarla en esta forma, y dictó su decreto.

¿Se ha excedido en sus facultades?

¿Estaban éstas limitadas á las reglas que ha fijado el señor Senador por Buenos Aires?

Sobre esto puede haber opiniones diversas; los términos de la ley de Capital son tan generales y tan vagos, que se prestan á diversas interpretaciones, y aunque participo de la opinión del señor Senador por Buenos Aires, concibo también que el Poder Ejecutivo ha podido tener otra.

Pero, ¿qué hay en el fondo de todo esto?

¿Ha habido una desviación de las reglas, de tal naturaleza que requiera un voto de desaprobación del Senado, expreso ó implícito?

¿Es cierto que el Poder Ejecutivo haya cometido una usurpación de las facultades del Congreso, que la haya cometido con dañino intento y con perjuicio de los intereses públicos? Evidentemente no.

Si en el juicio interpretativo de la ley que el Poder Ejecutivo trataba de aplicar, la ha entendido de una manera distinta á alguno de nosotros, debemos sin embargo reconocer que al hacerlo no ha existido en el Poder Ejecutivo, porque eso está visible, el propósito de asumir las facultades del Poder Legislativo, de usurparle sus poderes, y, mucho menos, de ejercer estos poderes con dañano propósito para los intereses públicos ó siquiera sea con propósitos que no estén perfectamente justificados por los intereses públicos.

Entonces, no me parece que sería justo ni conveniente un voto de desaprobación expreso ó implícito.

Es necesario tener en cuenta que en situaciones como aquélla en que se encontró el Poder Ejecutivo Nacional después de la ley de Capital, se producen siempre estos hechos porque el cambio en el mecanismo de una parte del Gobierno y mientras que su marcha no se encarrila produce entorpecimientos y perturbaciones.

Entonces, lo que corresponde á la prudencia del Congreso es examinar la naturaleza de estos hechos y examinarla con espíritu sereno y de justicia para ver si los hechos de que se trata son de tal naturaleza que merezcan reprobación ó si son meros errores que provienen de un juicio equivocado y disculpable.

Creo que nos encontramos en este último caso: que el Poder Ejecutivo Nacional no ha procedido con ánimo de usurpar las facultades del Congreso, que él pudo entender, dados los términos vagos de la ley de Capital, que estaba autorizado para hacer las modificaciones que ha introducido con el ánimo de mejorar los servicios públicos. Y en tal caso, señor Presidente, la práctica de todos los parlamentos no es la desaprobación, no es ni siquiera el silencio; lo que corresponde es lo que se llama

en Inglaterra «bill de indemnidad», un voto aprobatorio *a posteriori*.

Voto aprobatorio que viene á sancionar el hecho realizado en situación anormal.

No sucedería lo mismo si examinando los antecedentes de este negocio encontramos abuso de facultades con intento dañino y manifiesta usurpación de las facultades del Congreso; en ese caso, correspondería un voto de desaprobación claro y explícito.

Sr. Igarzábal—He votado en general en contra de este proyecto porque me parecía que su forma no era ajustada estrictamente á las prescripciones constitucionales, ó mejor dicho, no la considero conforme con el espíritu de la misma Constitución.

(Este proyecto contiene dos cosas diferentes.

Indudablemente que el Congreso debe pronunciarse sobre el decreto que se ha citado ya y á que se refiere el proyecto del Poder Ejecutivo organizando el Consejo de Educación en la ciudad de Buenos Aires.

Ese decreto, señor Presidente, está plenamente justificado por las circunstancias, no en una parte, sino en todas sus partes, y esto sólo basta para que él merezca la aprobación del Congreso; pero la aprobación por una ley especial.

Lo que encuentro en este despacho de la Comisión es simplemente defecto de forma.

Debiera, á mi juicio, la Comisión haber dividido en dos partes su despacho: un proyecto de ley aprobando el decreto del Poder Ejecutivo, porque es indudablemente justificado y por el hecho merece la aprobación del Congreso, y otro proyecto de ley organizando el Consejo de Educación y dándole las facultades que debe tener.

Es tanto más criticable la forma de este proyecto, señor Presidente, cuanto que por él se constituye en ley de una manera permanente un decreto del Poder Ejecutivo. Eso es lo que tiene de grave, y estaría conforme con todo lo que la Comisión aconseja, con tal de que lo hiciera en otra forma: dos proyectos, uno para aprobar el decreto de que se trata, que le daré mi voto con mucho gusto, y otro para constituir este Consejo, votando una ley, cláusula por cláusula, ó el decreto constituido en pro-

yecto de ley del Poder Ejecutivo, si se cree conveniente, con las reformas que la Comisión crea necesario introducir.

Simplemente mis observaciones se dirigen á la forma, no al fondo del proyecto de la Comisión.

Si la Comisión aceptase estas indicaciones, me parece que encontraría de parte de los que tienen estos escrúpulos, por cuestión de forma, el asentimiento completo á lo que ella propone.

Sr. Ortiz—Me permito hacerle al señor Senador una pequeña observación, que tal vez lo haga desistir del pensamiento que ha formulado.

Si procedemos en la forma que indica el señor Senador, nuestras facultades en las sesiones prorrogadas se limitarían únicamente á decir: apruébase el decreto del Poder Ejecutivo. En ese caso ya no podría el Congreso entrar á dictar una nueva ley, como pretende el señor Senador, creando el Consejo de Educación, reglamentando sus facultades, etc., porque dada la circunstancia de estar el Congreso en sesiones de prórroga, y habiéndose remitido este proyecto, como está, por el Poder Ejecutivo, tenemos que limitarnos á aprobar ó desaprobar el decreto: no podemos entrar á hacer una nueva ley.

Desde que las observaciones del señor Senador se refieren únicamente á la forma, me parece que esta cuestión de forma no debe posponerse á la cuestión de fondo.

Sr. Igarzábal—Me parece impropio un acto legislativo para constituir en ley un decreto del Poder Ejecutivo.

Sr. Del Valle—¿Quiere decirme el señor Senador lo que encuentra malo?

Sr. Igarzábal—Lo malo son los precedentes.

Sr. Del Valle—¿Cuál es el mal precedente?

Sr. Igarzábal—El Poder Ejecutivo podría tomar toda clase de medidas por medio de decretos y mandarlos aquí, y nuestra misión se reduciría á aprobar ó desaprobar los decretos del Poder Ejecutivo. Si las facultades del Congreso se redujeran á esto, mejor sería que no existiera, que no hubiese Congreso.

Sr. Del Valle—El señor Senador por San Juan, cuando daba las razones por qué se oponía al dictamen de la Comi-

sión, nos decía que, si se aprobara el decreto del Poder Ejecutivo quedaría fijado el antecedente de que en adelante puede legislar por medio de decretos sometiéndolos en seguida á nuestra aprobación.

Me permito observar que esa objeción está en pugna de la idea que él mismo ha enunciado de aprobar el decreto en otra forma, porque si ese peligro existe, la cuestión no es de forma, sino de fondo.

No necesito demostrar cuán infundados son los temores del señor Senador, de que con tal antecedente se crea autorizado el Poder Ejecutivo para resolver por medio de decretos todas las materias que corresponden al Poder Legislativo; pero aun en ese caso quedaría siempre á salvo la autoridad del Congreso, que no le prestaría su aprobación cuando creyese que se había extralimitado en sus facultades.

En cuanto á la cuestión de forma, pienso que no hay irregularidad alguna. La aprobación del decreto y sus modificaciones son ideas conexas y naturalmente vinculadas.

Necesitamos mantenerlas unidas, porque el aprobar el decreto del Poder Ejecutivo en cuanto al pasado, tenemos que decir lo que se hará en adelante. No hay posibilidad de hacer otra cosa que declararlo en vigencia hasta que se dicte una nueva ley, y al declararlo así, como tiene defectos, que notamos y son fáciles de remediar, decimos: continúa en vigencia con tales modificaciones.

El orden lógico de las ideas nos conduce á ese resultado y la forma responde al fondo.

Indicaba el señor Senador también que no hay precedente entre nosotros de que se haya puesto en vigencia un cuerpo de disposiciones como la ley de educación sin discutir artículo por artículo, pero creo que en esto sufre error.

Sr. Igarzábal—En casos muy especiales, como el referente al Código del doctor Vélez Sársfield.

Sr. Del Valle—No son tan raros.

Sr. Igarzábal—Desearía que me citara otros.

Sr. Del Valle—Todas las leyes federales de la Nación proyectadas por el Poder Ejecutivo y sancionadas por el Congreso por sus títulos, leyes que de-

claran los delitos nacionales, que organizan los tribunales, la justicia federal, leyes de fondo y de forma.

Sr. Igarzábal—Está equivocado el señor Senador.

Sr. Del Valle—He tenido ocasión de verificarlo poco tiempo hace.

Sr. Argentó—Con la ley sobre Banco Nacional sucedió lo mismo.

Necesito precisar mis ideas sobre esta cuestión.

He estado muy lejos de querer hacer un cargo ó una censura al Poder Ejecutivo por su proceder; creo que él ha procedido con perfecta buena fe y que se ha creído facultado por la ley de Capital para dictar todas estas disposiciones, tendientes á regularizar la administración de este municipio capitalizado. Así es que no hago cargo de ningún género y creo que el Poder Ejecutivo ha considerado que se trataba de llenar una necesidad sentida, dictando esos decretos, creyéndose facultado por la ley de Capital para ello.

Pero yo me coloco en este dilema forzoso y digo: ó en virtud de la ley de Capital se ha autorizado al Poder Ejecutivo, se puede decir, de una manera omnimoda, para dictar toda clase de disposiciones tendientes á regularizar la marcha administrativa de esta ciudad declarada Capital de la República, de manera que pudiera salir de sus facultades constitucionales y dar decretos que tengan el carácter de verdaderas leyes, como ésta: y yo digo, como lo he sostenido en todos los asuntos análogos que se han presentado al Senado, que el Congreso ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial pueden hacer delegación de sus facultades constitucionales en favor de uno ni otro poder, y en este caso, respetando la sanción del soberano y limitándome á mi propia opinión, creo que no hemos podido hacer eso, ó no ha tenido el alcance que se le da á esa disposición de la ley de Capital, y en ese caso indudablemente el Poder Ejecutivo, de buena fe tal vez, se ha extralimitado en sus facultades por la manera vaga en que está concebido el artículo de la ley: así es que en este caso, si se ha extralimitado en sus facultades, nosotros no podemos venir por un acto á posteriori á sancionar esa extralimitación ni tampoco podemos de-

Octubre 8 de 1881

CAMARA DE SENADORES

5.^a sesión de prórroga

legar un ápice de nuestras atribuciones constitucionales en favor de otro poder, porque eso nos está expresamente prohibido por la Constitución.

No podemos dar un voto de indemnidad. Eso estará admitido en otras partes; pero nuestras instituciones son distintas de las del parlamento inglés, que es un parlamento soberano, omnipotente, y nuestros poderes públicos son restringidos, son limitados.

Estamos en diametral oposición, y por consiguiente, mal se puede traer como precedente legislativo para nosotros lo que se hace en otras partes en virtud de disposiciones amplias, cuando las de nuestra Constitución son restrictivas. Este es un principio inequívoco de nuestro derecho constitucional.

Deseaba dar esta explicación para que se viera por qué razón he votado en general en contra de esta disposición, como también lo haré en particular.

Sr. Igarzábal—Quiero hacer constar que cuando he afirmado que la ley de 14 de Septiembre de 1863 fué sancionada en la forma en que lo son todas las leyes, decía la verdad. La forma de la ley es ésta: El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina. Título primero, disposiciones comunes, artículo primero, la jurisdicción de los tribunales, etc. Aquí no aparece ninguna ley del Congreso que diga: apruébase tal trabajo hecho por el Poder Ejecutivo ó por algún abogado. Trae la forma de todas las leyes, votada artículo por artículo. No es una ley que diga: constitúyese en ley de la Nación tal trabajo ó tal decreto. Eso es lo que yo había afirmado.

Sr. Del Valle—El señor Senador toma el Registro Oficial para probar el punto en discusión.

La manera como se discuten las leyes está en el «Diario de Sesiones» de las cámaras y apelo á él para probarle que el señor Senador no está en la verdad.

Pero esta no es cuestión que se debe discutir. Los señores senadores podrán verificarlo después de la sesión.

Sr. Presidente—Se votará por partes el artículo 1.^o

—Se vota la primera parte en esta forma: «Apruébase el decreto del Poder Ejecutivo fecha 28 de Enero, que crea el Consejo Nacional de Edu-

cación con las siguientes modificaciones»... y se aprueba.

—Se lee la segunda parte.

Sr. Barros—En esta parte voy á proponer una modificación.

No estoy conforme con estas comisiones *ad honorem* que han dado siempre muy malos resultados, porque no desempeñan sus funciones con la contracción necesaria, ni puede exigírseles más de lo que buenamente hagan, desde que sus funciones son gratuitas.

Considero una regla de buena administración pagar á todos los empleados; no establecer cargos gratuitos.

Propongo, pues, que á los miembros de estas comisiones se les designe una retribución.

Sr. Del Valle—Ha sido materia de serias deliberaciones en la Comisión el inciso que está en discusión.

La Comisión ha discutido este punto con el Superintendente de Escuelas y con el señor Ministro de Justicia, Culto é Instrucción Pública, y estudiándolo bajo sus diversas faces, ha llegado á la conclusión de que era preferible la forma que se establece en este inciso.

Hemos tenido ideas equivocadas respecto de la organización que más conviniera dar al cuerpo directivo de la educación pública y declaro, por mi parte, que he sido uno de los que pensaban que convenía que este Consejo fuera de empleados, de funcionarios rentados. La experiencia y estudios mayores que he podido hacer de la cuestión, han modificado mi opinión. He visto que, casi sin excepción, no sé si habrá alguna, en todas partes del mundo la educación está confiada á un consejo gratuito que tiene funciones puramente consejos, cuando no se trata de personas que por razón de su empleo forman parte de aquel consejo como miembros natos, con la única excepción del superintendente ó del secretario, que así se llamaba en Massachusetts el funcionario rentado que representaba la capacidad facultativa en materia educacional y con cuyo nombre sirvió ese puesto durante largos años el eminente Horacio Man.

Las funciones de consejeros que deben desempeñar los vecinos de los municipios, padres de familia, las personas más interesadas y comprometidas en el

resultado de la educación que se da en su época, para no hablar de las consecuencias futuras que puedan tener respecto del país.

Son ellas las llamadas á desempeñar este cargo puramente consejil, y, entonces, no hay razón alguna para retribuirles é imponer gasto tan pesado á la educación que, en realidad, es la que lo soporta, porque todo lo que se distrae en la administración de escuelas se le quita á la educación misma, desde que se traduce en disminución del caudal escolar y, por lo tanto, en menor número de escuelas y medios de enseñanza.

Las funciones de inspector que se acumulaban á las de consejero no son compatibles con este puesto y se ha observado que el nombramiento de los consejeros rentados no responde, por causas que es inútil discutir, á los objetos educacionales.

Así se ve que los dos consejos de educación que hemos tenido, de la Provincia antes y el actual de la Nación, si bien han tenido á su frente educacionistas distinguidos, los demás miembros del Consejo no han sido electos, como lo observa el Superintendente atinadamente en su notabilísima Memoria, por razones que se refieran á la educación.

Tengo en los dos consejos de educación amigos personales por los cuales siento la más alta estimación, que son, por otra parte, hombres de reconocida ilustración y talento, pero no obsta á que reconozca la verdad. El Senado conoce perfectamente á todos los caballeros que forman el Consejo Nacional y sabe que, con marcadas excepciones, este juicio es rigurosamente exacto.

El Consejo, en esta forma, no responde á su objeto, y en cuanto á las funciones de inspectores que se les atribuye, se puede ver con la lista de los consejeros por delante, que es imposible que la mitad de ellos desempeñen tal inspección.

Sr. Barros—¿Me permite? No he propuesto que ellos mismos sean los inspectores.

Sr. Del Valle—El señor Senador tendría que duplicar el gasto porque los inspectores es necesario crearlos.

Sr. Barros—Se puede determinar el número de vocales; pueden ser cuatro.

Sr. Del Valle—Son funciones incompatibles las de los consejeros y los inspectores.

La Comisión piensa que es conveniente conservar esta institución con su verdadero carácter, entregando la educación pública á un superintendente, es decir, una persona facultativa, con toda la competencia necesaria para dirigir la educación y un cuerpo consejil que lo acompañe en sus tareas.

Dividamos la inspección de las escuelas para los objetos de la administración de los fondos de la educación común, materia delicadísima y que requiere nuestra atención, como debe estar persuadido el Senado, y creámos inspectores rentados, responsables ante el Consejo y ante el superintendente de escuelas del desempeño de sus funciones. De esta manera cree la Comisión que se avanza mucho en el gobierno actual de nuestra educación y que eliminaremos las dificultades que todos los señores senadores conocen que se han producido en el seno mismo del Consejo á consecuencia de su organización defectuosa y no por razón de las personas que lo componen, como lo observa perfectamente el señor Superintendente de escuelas.

He hablado posteriormente con el actual Director general de escuelas de la Provincia sobre la organización proyectada para completar los datos que había recibido del señor superintendente de la Nación, y él con su reciente experiencia ha corroborado todas las reflexiones del señor Sarmiento, y aunque uno de los miembros del Consejo de la Provincia se encuentra presente en el seno de la Cámara, séame lícito decir que el señor Director general de aquellas escuelas cree como el superintendente de las de la Nación que sería mejor un cuerpo de consejeros puramente honoríficos, de padres de familia y vecinos que colaboraran á esta tarea, con carácter puramente consejil y, en consecuencia, gratuito.

Por estas razones brevemente expresadas, no puedo, á nombre de la Comisión, aceptar la modificación que propone mi honorable colega por La Rioja.

Sr. Barros—Pido la palabra.

Voy á hacer una moción que quizá sea aceptada. Creo que las mismas razones que ha manifestado el señor Sena-

dor por Buenos Aires para el puesto de miembro del Consejo sea desempeñado *ad honorem*, son aplicables al Presidente de esa corporación, y, entonces, esa Comisión reuniría mayores garantías, pues que la circunstancia de no ser pagos hace dar mejores resultados.

Antes había manifestado que estas comisiones nacionales han existido en Buenos Aires y que absolutamente no han dado resultado; que el resultado que han dado esas comisiones ha sido hacer la más grande estafa del Tesoro de la Nación en esta Provincia.

Sr. Del Valle—No había superintendente de escuelas.

Sr. Barros—Han sido *ad honorem* las comisiones que tenían las facultades que tiene también ésta por las leyes del Congreso.

La exposición que ha hecho el señor Senador por Buenos Aires no me ha satisfecho absolutamente. Yo no había indicado que los mismos vocales fueran también los inspectores; decía que en vez del número que el Poder Ejecutivo propone, se pusieran cuatro, y que hubieran los dos inspectores que la Comisión propone en este proyecto de ley que se discute, para que ellos hagan el servicio á que están destinados.

Por consiguiente, hago moción para que en vez de seis sean cuatro, y éstos con el sueldo que la ley de Presupuesto designa. Si alguno de los señores senadores apoya esta modificación que propongo al primer inciso que presenta la Comisión...

Sr. Pellegrini—Yo soy miembro del Consejo de Educación de la Provincia, señor Presidente, y puedo, por conocimiento de la existencia de este cargo, dar una opinión al respecto.

Creo que, efectivamente, el sistema de rentar estos puestos de miembro del Consejo es un sistema completamente equivocado, cuyo primer resultado es desnaturalizar el cargo convirtiéndolo, de cargo municipal, en empleo á sueldo, y como consecuencia inmediata el que sea desempeñado, no por un individuo que busque sólo los intereses del municipio, sino un empleo cualquiera. No se comprende la lógica que habría en rentar al miembro de un Consejo de Educación, que es una rama de la administración municipal, y no rentar al municipal: es exactamente la misma función,

del mismo carácter y aun más restringida, porque la función del municipal abarca materias mucho más vastas y diversas.

En la Provincia de Buenos Aires, al dictarse la ley de educación, se fijó sueldo á los consejeros, apartándose, en este solo caso, de la regla de sistema generalmente adoptada en la Provincia, esto es, que esos cargos fueran gratuitos, y por eso es gratuito el cargo de miembro del directorio del Banco de la Provincia, del Banco Hipotecario, del Ferrocarril del Oeste, de la Comisión de Aguas Corrientes y de la Municipalidad, y sólo se explica que se haya dado sueldo á los miembros del Consejo por otra disposición de la misma ley, que obliga á los consejeros á asistir diariamente al despacho de los asuntos. La práctica ha venido á modificar la disposición de la ley y á demostrar que es innecesaria esta asistencia diaria y que para las funciones que están á cargo de los consejeros basta su asistencia dos ó tres veces por semana, aun también por un tiempo muy limitado. Por consiguiente, se ha modificado en este sentido y se ha modificado con provecho: la asistencia es más activa, más regular hoy que no se observa la disposición de la ley que establece la reunión diaria. La verdad es que esa modificación debería haber importado también la supresión del sueldo, y creo que la Provincia, el día que llame á estudio esta cuestión, ha de modificar en esta parte su ley y declarar gratuito el servicio.

Tratando de aplicarse á la Nación, no rigiendo esta disposición y estando en libertad de fijar el sistema, creo que el Congreso debe establecer el sistema de servicio gratuito para la función de consejero.

No se pueden equiparar las funciones de consejero con las de director ó presidente: las del presidente ó director son funciones de administración, tiene que administrar todo lo que se refiere á la educación, dedicando todo su tiempo toda su atención á este cargo, mientras que el consejero sólo aconseja en días determinados en que se reúne á estudiar en los asuntos que se le someten, y es por esta razón que la Provincia, á pesar de haber aceptado el sistema del cargo gratuito, sin embargo para sueldo al Presidente del Banco Hi-

potecario, del Ferrocarril del Oeste y al Director general de escuelas, porque exige de todos estos ciudadanos una dedicación completamente distinta y les confiere también atribuciones mucho más altas.

Creo que el personal del Consejo de Educación estará mejor compuesto y que se llenarán todos los fines de la ley el día que esta función sea declarada gratuita.

Y esto se explica: el ciudadano que acepte un puesto gratuito de director de la enseñanza es porque comprende toda la importancia de la misión que se le confía y porque está dispuesto á dedicarle toda su inteligencia y actividad, no habrá aliciente ninguno extraño á la educación que pueda llevarlo á aceptar ese empleo, mientras que si se fija un sueldo tan elevado como el de doscientos cincuenta fuertes, fácilmente comprenderá el Senado que puede irse á ocupar ese puesto aunque no se tenga mucho interés por la educación.

Sr. Presidente—Se va á votar la modificación propuesta por el señor Senador por La Rioja.

Sr. Barros—Como no ha sido apoyada debe votarse el inciso.

Sr. Presidente—Se va á votar el inciso 1.º del artículo 1.º

—Se vota y es aprobado.

—Se lee el inciso 2.º

Sr. Barros—Voy á hacer notar á la Comisión que la división que se hace para el nombramiento de estos empleados la creo poco conveniente, porque, á mi juicio, hay otras personas tan competentes como pueden serlo los maestros normales, puesto que en todas las provincias existen colegios, y, por consiguiente, jóvenes que han concluido todos los estudios preparatorios y que han tenido ya, desde ese punto, que dedicarse al profesorado ó á otros puestos que se relacionan con la educación, y resultará que ninguno de estos jóvenes podrá ser nombrado, sino aquéllos que han cursado en los colegios normales.

Por esta razón, considero que es conveniente suprimir esa condición y dejar esta facultad al Consejo para que éste proponga las personas que juzgue aptas para desempeñar estos puestos.

Sr. Del Valle—La razón de esta disposición se comprende fácilmente.

El objeto es llevar á la inspección de la educación á los que tengan conocimientos profesionales.

El señor Senador se equivoca si cree que un estudiante que haya concluido estudios preparatorios, ó cosa semejante, tiene la misma competencia para inspeccionar de escuelas. Se encuentra en las condiciones de cualquier habitante de la República; no tiene competencia especial de ningún género para ser inspeccionador. Son las escuelas normales las que producen maestros, y éstos son los competentes para hacer la inspección de escuelas.

Por esto es que se establece que sean los maestros normales, porque esos establecimientos han sido fundados expresamente para dar la competencia profesional en la educación pública, que es distinta á la competencia literaria ó científica.

Sr. Barros—Se trata de inspeccionar profesores.

Sr. Del Valle—Para inspeccionar maestros es necesario ser maestro.

Sr. Gómez—En las escuelas normales hay cursos especiales para la inspección técnica.

Sr. Del Valle—Nadie más competente para inspeccionar escuelas que los que saben enseñar.

Debo declarar con entera franqueza que este artículo fué proyectado de común acuerdo con el superintendente y el señor Ministro de Instrucción Pública. Recibí más tarde una indicación del señor superintendente de escuelas en sentido contrario: El me decía: «El artículo es bueno, pero temo que no vayamos á encontrar el número de maestros normales competentes para desempeñar estos puestos, ó que vayamos á estar demasiado restringidos teniendo que elegir entre un número pequeño, y quizá fuera mejor no exigir la condición de ser maestro de la escuela normal.»

A pesar de tal indicación, hemos persistido en mantener esa prescripción porque el inconveniente del número restringido de maestros normales es transitorio.

Puede ser que este año no haya muchos maestros normales entre quienes elegir, sin embargo de que pienso que

hay número bastante con relación á las necesidades actuales, pero aun en el supuesto de que así no sucediera, dentro de dos ó tres años este número se habrá duplicado ó triplicado, y aun cuando es cierto que muchos tienen ya colocación, como este cargo es más elevado ha de ser preferido, y conviene á la educación pública que los que sean más competentes se lleven á los más altos puestos.

El inconveniente que existe, pues, es transitorio, mientras que el peligro de aceptar la modificación que propone el señor Senador por La Rioja es serio.

Tengo la más completa seguridad de que tanto el señor superintendente actual de la educación como el señor Ministro de Instrucción Pública, no ha de proponer el primero, ni el segundo ha de nombrar personas que no fueran competentes para estos puestos.

Pero las leyes no se dictan con relación á los hombres, es decir, con relación á los hombres que incidentalmente ocupan un puesto público, y la seguridad de la actualidad no basta para el futuro.

Más tarde ó más temprano sucedería lo que sucede siempre cuando no hay freno legal que detenga los intereses y las pasiones de los hombres en la órbita dentro de la cual deben girar.

El empleo de inspector había de ser codiciado si ofreciera ventajas pecuniaras, se convertiría en nuevo cebo para la empleomanía, y se acordaría no por razones de competencia, sino por influencias personales ó políticas, que obran con tanta eficacia en este y en todos los países de la tierra.

Estas razones nos han parecido tan poderosas que hemos resistido la indicación del señor superintendente de escuelas.

Sr. Gómez—Iba á votar en contra de este proyecto en general, pero ahora voy á votar en favor ante la amenaza de que se acepte la modificación que se propone.

Creo altamente conveniente que los inspectores sean maestros normales, tanto por la competencia que deben tener cuanto porque en las escuelas normales hay cursos especiales de inspección técnica para los inspectores.

No creo que han de faltar maestros normales para ser nombrados inspecto-

res, porque tenemos escuelas normales desde hace mucho tiempo que han producido muchos alumnos y que tal vez estaban sin colocación.

Para estos puestos, que no son muchos no ha de faltar quien los desempeñe.

Yo conozco en San Juan—y supongo que en las demás provincias ha de suceder lo mismo—no menos de seis ó siete maestros normales, con sus títulos correspondientes, salidos de las escuelas del Paraná y Tucumán, que están á cargo de escuelas particulares ganando 30 ó 40 pesos fuertes mensuales, y si han aceptado esos puestos ha sido porque no tenían otra colocación en su carrera.

Ahora mismo hay abundancia de personas aptas para llenar los puestos de inspectores y cada año que pase habrá más.

Sr. Figueroa—Yo había estado en oposición á este artículo, y por lo que he oído al señor miembro informante me he ratificado más en la oposición.

El señor miembro informante desea que el personal de inspectores de escuelas sea competente, y con este objeto indicaba que el nombramiento debía recaer en maestros normales.

No creo que la educación primaria es del resorte exclusivo de las provincias y que el Congreso no debe legislar sobre esta materia.

La Nación subvenciona la educación en las provincias, y, por lo tanto, sólo tiene derecho de intervenir en la inversión de los fondos y ver si se han aplicado á su destino. No son inspectores de educación los que deben mandarse á las provincias, sino inspectores de la inversión de los fondos, esto es, contadores para que vean si se gasta el dinero como la Nación quiere.

Por esta razón he de votar en contra del artículo.

Sr. Baibiene—Pido la palabra.

Voy á votar en favor de este artículo, pues él me es sumamente simpático.

Además de las razones obvias, incontestables, expuestas por el señor miembro informante de la Comisión y por el honorable señor Senador por San Juan en su favor, tiene para mí esta condición que lo hace, como he dicho antes, simpático: la restricción que establece, y que es la que ha ocasionado la discu-

Octubre 8 de 1881

CAMARA DE SENADORES

5.ª sesión de prórog.

sión; es un inciso verdaderamente revolucionario.

Hasta ahora para todos los destinos públicos habían sido suficientes, completamente suficientes, los doctores: era necesario ser doctor ó bastaba ser doctor, para ser habilitado para el desempeño de todos los destinos públicos, y aun de todos los oficios, de cualquier género que fuesen.

Este inciso trae el sello del genio de su autor. Indudablemente el señor superintendente de escuelas es quien lo ha ideado ó quien lo ha formulado.

Viene estableciéndose que los modestos maestros normales pueden ser subinspectores de escuelas y que no podrán serlo los doctores. Lo que quiere decir que esta profesión, tan modesta como es, en algunos respectos es superior á la ciencia del médico y del abogado.

Como he dicho antes, es verdaderamente revolucionaria esta ley, pues esta es tal vez la única disposición que hasta ahora se haya formulado en ese sentido, y como está justificada por todas las razones que en su favor se han aducido, yo he de votar en favor de este inciso.

Sr. Presidente—Si no se hace uso de la palabra, se va á votar el inciso 2.º que se ha leído.

—Se vota y es aprobado, pasando en seguida la Cámara á un cuarto intermedio.

III

—Vuelto á sus asientos los señores Senadores, dice el:

Sr. Presidente—El señor Senador electo por la Provincia de Salta ha presentado los poderes que lo acreditan en ese carácter y ha solicitado su incorporación.

Sr. Ortiz—Hago moción para que la Comisión de Poderes se expida, si es posible, en un cuarto intermedio, es decir, si los títulos no ofrecen dificultad, y como hay número suficiente de senadores sin contar los miembros de la Comisión de Poderes, podrían éstos pasar á ocuparse de ese asunto sin perjuicio de continuar el Senado ocupándose de la orden del día.

—Apoyado.

Sr. Presidente—Si no hay oposición, así se hará.

Sr. Lucero—Así es la práctica.

—Así quedó resuelto pasando la Comisión de Poderes á ocuparse de los diplomas presentados por el doctor Oliva, electo Senador por Salta.

IV

Sr. Presidente—Continúa la discusión pendiente.

Sr. Ortiz—Voy á permitirme pedir que se agregue al artículo ya sancionado, una parte que es muy necesaria y que no se ha puesto por un olvido de la Comisión.

Donde dice: «los inspectores y subinspectores serán nombrados por el Poder Ejecutivo», y gozarán del sueldo que le fije la ley del Presupuesto.

Sr. Febre—Me parece que debiera hacerse moción de reconsideración.

Sr. Ortiz—No es necesario, porque es una simple adición á lo que se ha sancionado; pero si le parece mejor al señor Senador, puede ponerse como base tercera.

Sr. Febre—Me parece mejor, porque creo que para agregarlo al artículo ya sancionado, es necesario hacer moción de reconsideración.

Sr. Secretario—El Reglamento dice: «las adiciones á los artículos ya sancionados, que no alteren ó contradigan su esencia, no importan reconsideración».

Sr. Febre—Estoy conforme.

Sr. Presidente—Se va á votar la adición propuesta por el señor Senador por Salta.

—Se vota y es aprobado leyéndose en seguida el inciso 3.º

Sr. Ortiz—Después de sancionados los incisos anteriores, que se refieren al Consejo de Educación, el inciso 3.º debe ponerse como artículo 2.º

—Así queda resuelto.

Sr. Gómez—Puede votarse el otro inciso.

Octubre 8 de 1881

CAMARA DE SENADORES

5.ª sesión de prórroga

Sr. Presidente—Está en discusión el inciso 4.º, que ahora viene á ser 3.º

Sr. Ortiz—En este inciso ha habido disconformidad entre el señor superintendente y el señor Ministro de Instrucción Pública, que asistieron al despacho de la Comisión cuando se ocupó de este proyecto.

El señor Ministro pretendía introducir una modificación en este artículo, que consistía en lo siguiente: «El Consejo de Educación funcionará bajo la superintendencia del Presidente del Consejo».

Esta era la modificación que el señor Ministro pretendía introducir, y el señor superintendente general se oponía á ella, creyendo que importaba una limitación de las facultades especiales del superintendente general.

Uno de los miembros de la Comisión, el doctor Del Valle, estaba conforme con la idea del señor superintendente, y otro, que era el que habla, estaba disconforme.

La razón que tuve para estar disconforme con esa idea, fué la de que la legislación ó el sistema que rige actualmente la educación pública no establece la independencia absoluta del Consejo de Educación ó de la administración de las escuelas para con el Ministerio de Instrucción Pública, que es el que tiene á su cargo esa parte de la administración pública. Así es que tanto el Consejo Nacional de Educación como el superintendente, son á mi juicio, dependientes subalternos del Ministro de Instrucción Pública, á tal punto que éste, por medio de un decreto ó de una medida administrativa, puede cambiar cualquiera resolución del Presidente del Consejo.

Desde que el Ministro del ramo puede no aceptar las indicaciones que le haga el superintendente, es claro que no existe esa independencia, esa autonomía absoluta que se pretende introducir, y en la cual se ha fundado el señor Senador para negar que al Ministro compete el derecho de asistir, es decir, no le niega el derecho de asistir, sino que no tiene ninguna facultad, estando presente y presidiendo el Consejo, para opinar.

Y, dada esa disidencia que reinaba en la Comisión, se prefirió dejar el artículo tal cual estaba, expresando, como he dicho antes, que la opinión de mi

honorable colega el doctor Del Valle es contraria.

Creo, pues, que en nuestro sistema de administración, dependiendo todas las oficinas exclusivamente del Ministerio del ramo, no puede negarse que cuando el Ministro del ramo concurra á la deliberación del Consejo, tenga derecho de presidir, y es por esto que propongo el agregado al artículo 4.º, ahora 3.º, que está en discusión.

Sr. Villanueva—Pido la palabra.

A mí me parece que sería inusitado que se agregara lo que propone el señor Senador por Salta al artículo en discusión.

Todos los ministerios tienen sus reparticiones. El Ministro de Hacienda tiene varias. Tiene la Contaduría, tiene la Aduana, etc., y jamás va el Ministro de Hacienda á presidir las reuniones de esas administraciones y á deliberar en ellas. Llama á los empleados, conferencia con ellos, etc.

Lo mismo sucede en los ministerios de Guerra, del Interior, etc.

Sería introducir una novedad precisamente en el asunto de las escuelas.

Yo creo que no ganaría nada la instrucción pública con que fuera ó no á presidir el Ministro.

El se entenderá con el superintendente de escuelas y aprobará ó no lo que éste haga dentro de sus atribuciones; pero no es necesario que vaya á la superintendencia y que presida las reuniones para deliberar sobre los asuntos que le están encomendados.

Por estas razones me he de oponer á que se modifique el artículo que está en discusión.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

Los ejemplos que acaba de citar el señor Senador por Mendoza no tienen aplicación al caso, pues en las demás oficinas que pertenecen á la Administración no hay tales consejos de administración. Sus empleados, jefes de sus respectivas oficinas, todos están sometidos á las inmediatas órdenes del Ministro del ramo.

Se puede decir que el Ministro es el jefe en todas las oficinas de su dependencia.

Pero, por lo mismo que el Consejo de Educación, tal como se ha establecido por la ley, no es una oficina completa-

mente dependiente, no es una oficina ejecutiva, sino más bien deliberativa ó concejil; es natural que el Ministro del ramo tenga en el seno de esa oficina su asiento y su palabra y la importancia que ella debe tener.

La presencia del Ministro en el Consejo no tendría más objeto que hacer más fácil y apresurar el buen resultado de las deliberaciones, porque así se evitaría que una resolución del Consejo tuviera que pasar por la comunicación de notas, para después volver modificada por la opinión del Ministro, que tal vez diría: no acepto la indicación del Consejo.

La presencia, pues, del Ministro en el Consejo contribuiría á que las deliberaciones fueran más rápidas.

De ninguna manera puede afectar los intereses de la educación ni las atribuciones del Consejo, puesto que de todas maneras las deliberaciones del Consejo han de ser sometidas al del Ministro, y es claro que estando él presente á esas deliberaciones, tendrían de antemano su aprobación y no se perdería tiempo.

De otro modo, siendo el Ministro el jefe de la administración en el ramo de instrucción pública, ¿qué papel haría concurriendo al Consejo deliberativo, y teniendo que ocupar un asiento inferior á los demás consejeros ó al superintendente de ese Consejo?

Naturalmente, cuando concurra el Ministro tendrá que ocupar el primer puesto, como cortesía y como facultad.

Por estas razones me parece más conveniente la agregación.

Sr. Gómez—Yo veo que los ministros ejercen sus facultades con arreglo á las atribuciones que la ley le fija en cada repartición, y no creo que el Ministro ha de ir á formar parte en las deliberaciones de sus empleados subalternos.

A más, tampoco creo que con la presencia del Ministro quedarán aprobados desde ya los actos y deliberaciones del Consejo de Educación.

El Ministro no ejerce facultades propias; las ejerce á nombre del Presidente de la República, y por más que las resoluciones del Consejo tuvieran la aprobación inmediata por la presencia del Ministro en el Consejo, siempre tendría que pasar al Ministerio para consultar la opinión del Presidente ó del consejo de ministros.

Así es que no se obviarían las dificultades de tramitación de que nos hablaba el señor Senador por Salta.

Cada oficina, y mucho más aquellas que tienen una responsabilidad establecida por la ley, debe tener facultades para que en lo interno puedan obrar sin el control inmediato del superior.

La Contaduría, por ejemplo, tiene sus atribuciones, y el Ministro de Hacienda no ha de ir á presidir el consejo de contadores, que tiene su presidente ya establecido.

Lo mismo sucede con cualquier otro Ministro, como lo ha dicho el señor Senador por Mendoza.

El Ministro de Guerra, cuando vaya á la Inspección General de Armas, no ha de ejercer las funciones del inspector, porque no son de su competencia, ni al ir á un cuartel se ha de poner á mandar una compañía ó batallón.

Estas razones tengo para votar en contra de la agregación.

Sr. Argentó—Sucede una cosa irregular, que no sé si estará prevista por el Reglamento.

Una comisión que está compuesta de dos miembros, respecto de una idea, un miembro dice una cosa y otro dice otra. Fuerzas iguales se destruyen.

Entonces, aquí no hay dictamen de la Comisión de Legislación.

Creo, pues, que la indicación del señor Senador por Salta no tiene sino el carácter de una moción que debe ser apoyada por otros dos miembros.

Sr. Civit—Ya la ha sido.

Sr. Argentó—No sé si tiene apoyo.

—Apoyado.

Sr. Argentó—Deseo que se voten las dos ideas, porque estoy en contra de las dos.

Estoy votando en contra de toda la ley, y no quiero que se crea que voto en favor de unas disposiciones y en contra de otras.

Sr. Gelabert—Estando en discusión el proyecto presentado por la Comisión, el artículo de ésta es lo que debe votarse primero y si es rechazado entrará el que ha propuesto el señor Senador.

Sr. Baibiene—Además de las razones expuestas por el señor Senador por

Mendoza, como igualmente por el señor Senador por San Juan, en contra de la moción hecha por los miembros de la Comisión que han dictaminado en este asunto, voy á permitirme presentar esta otra á mi juicio es de gran importancia. El Consejo de Educación y la superintendencia, forman una oficina ó una repartición que no puede separarse. Las demás reparticiones de los distintos ministerios, tienen en cierto modo su autonomía propia y la prueba está en que tienen su renta expresamente designada por la ley misma. No podría, pues, por estas razones más, el Ministro del ramo, ir á presidir las sesiones que celebrara el Consejo de Educación.

Me permito hacerle esta observación al señor Senador que ha hecho la moción, para que la tenga en cuenta.

Sr. Gómez—Habría esta otra inconveniencia, que una vez que el Ministro forme parte del Consejo, irá con sus opiniones hechas á hacer allí cuestiones de estado. El Consejo debe estar libre de estas influencias.

—Se vota el inciso y se aprueba.

—Se rechaza el propuesto por el señor Senador por Salta.

—Se aprueba el resto del artículo; así como el artículo 2.º

—En discusión el artículo 3.º

Sr. Baibiene—Creo que por este artículo se establece un impuesto, si se refiere á las leyes vigentes en la provincia. Como esta ley es de carácter nacional, al asignar la renta que por aquellas leyes está creada, á los objetos de esta ley, viene á imponerse un nuevo impuesto equivalente á la renta de que se echa mano. Me parece que no es el Senado quien puede originariamente hacer esto.

Sr. Ortiz—Me parece que la observación del señor Senador por Corrientes, no puede aplicarse en toda su extensión al artículo que se discute. Esto no es propiamente una creación de impuestos, no es más que una declaración de que los fondos que ha de administrar el Consejo de Educación, son los mismos que le estaban asignados por las leyes vigentes de la provincia.

Más adelante, si las necesidades de la educación, exigen un impuesto mayor se modificará esta ley.

Por lo demás, el artículo es claro. Dice: continuará percibiéndose, es decir, se cobrará lo mismo que antes.

Por estas razones, me parece que la observación del señor Senador no es fundamental.

—Se vota el artículo 3.º y se aprueba.

—Se lee el artículo 4.º

Sr. Figueroa—De suerte que según este artículo, la Municipalidad no tiene facultad ni de asignar sueldos, ni de nombrar los maestros, ni de intervenir en nada! La Nación va á tomar sobre sí, la educación de todas las provincias? Esto importa quitarle á las provincias un derecho que la Constitución le acuerda: según ella, la educación primaria está á cargo exclusivo de las provincias, no es la Nación la que debe dirigirla.

Sr. Argentó—Es unitaria esta ley.

Sr. Figueroa—Infringe la Constitución.

Sr. Ortiz—Cada vez que oigo discutir como acaba de hacerlo el señor Senador por Catamarca sobre las prerrogativas y privilegios de los estados federales, encuentro una inconsecuencia que conviene que la tengan presente siempre los que se preocupan de legislar para el país; y es que siempre se alegan privilegios, garantías y derechos para los estados federales, cuando se trata de que la Nación no intervenga en ninguna de las cosas que le corresponden como nación; pero cuando se trata de pedir que vaya á hacer hasta hospitales á las provincias, entonces todos los estados reciben tranquilos y gozosos, lo que la Nación les da y no consideran que se les ataca en sus prerrogativas.

Es preciso, pues, ser un poco más consecuente y llamar las cosas como son.

No se trata por esta ley de despojar á los gobiernos de provincias de ninguna facultad que les corresponda como tales estados federales, se trata sola-

mente de dar cumplimiento á una ley dictada por el Congreso Nacional con consentimiento de todas las provincias que se han acogido á sus disposiciones.

Al dictarse la ley de subvenciones, por un artículo que el señor Senador debe conocer, se dejó en libertad á las provincias de acogerse ó no á los beneficios que esa ley acordaba. Así, pues, las provincias que no quisieran que la Nación interviniera en la forma establecida en la misma ley, debieron haberlo manifestado claramente y haber dicho: somos estados federales que nos bastamos á nosotros mismos, y no necesitamos que la Nación nos subvencione ni intervenga en el nombramiento de los maestros, ni vigile si los sueldos son ó no efectivos, ni si los fondos de la educación que la Nación costea se gastan en muebles y útiles para los gobernadores, etc.

Eso debieran haber dicho las provincias; pero desde que no lo han dicho y se han acogido á la ley, deben aceptarla en todas sus partes, porque la Nación no ha de dictar disposiciones que no sean convenientes á las provincias.

No pueden, pues, hacerse argumentos como los que hace el señor Senador por Catamarca, porque aquí no estamos ultrapasando ninguna facultad, estamos reglamentando las disposiciones de una ley.

La razón por la cual el artículo 3.º dice que previo informe del Consejo, se hará una escala graduada de sueldos para los maestros de escuelas es obvia.

Este límite también existe en la ley de subvenciones, que dice: La Nación pagará la mitad de los sueldos á los maestros de escuelas, pero se olvidó de decir que iban á pagar, de donde ha resultado que en muchas provincias se ha designado á los maestros ochenta y cien patacones de sueldo. ¿Con qué objeto, señor Presidente? ¿Para pagar la mitad de ese sueldo las provincias? No, señor; con el objeto de cobrar á la Nación la mitad de cien, por ejemplo para pagar con los cincuenta un sueldo que en realidad no es sino de treinta ó cuarenta fuertes. Y en prueba de esto voy á leer algunos anexos que hay en este libro.

Por ejemplo, en Santiago del Estero.

«Inspector de Escuelas, 160 fuertes.» La Nación ha dicho en su ley que costearía la mitad del sueldo de un inspector, no pudiendo ese sueldo exceder de ochenta fuertes.

Las provincias... algunas han interpretado esta disposición en el sentido de que la parte del sueldo del inspector que á la Nación le corresponde pagar, no debe exceder de ochenta; y entonces se ha dicho: ochenta pesos la Nación y nosotros ochenta pesos; pero le pagamos sólo ochenta y no lo sacamos de las cajas del Tesoro de la Provincia.

De manera que la Nación viene á pagar íntegro el sueldo del cual sólo debía pagar la mitad.

En Santiago, el Gobernador de la Provincia, gana doscientos fuertes, un profesor cien fuertes y ochenta cada maestra, ochenta fuertes que en moneda de aquel país son ciento treinta bolivianos.

Y así por este estilo.

Esto se ha reproducido en algunas otras provincias.

De ahí resulta la necesidad y conveniencia de reglamentar esto estableciendo, sino existe por el Consejo de Educación, una escala graduada para sueldos, que diga, por ejemplo: la Nación paga la mitad del sueldo de los maestros de escuelas; pero no podrá pagar más de tanto... por esa mitad; es decir, considerando la situación topográfica de cada provincia, sus medios de subsistencia, la mayor ó menor abundancia de recursos y de gastos, el Consejo prudencialmente dirá: para las escuelas de Buenos Aires los sueldos de los maestros á los efectos de la institución, serán de cien, ochenta, cincuenta, cuarenta, etc.; para los de las provincias de Salta, Tucumán y Jujuy, se fijan en tanto, debiendo pagar una mitad la Nación y la Provincia la otra. De esta manera no podría ser defraudada la Nación en sus rentas y sobre todo no podrían ser defraudados los pueblos en los gastos que hacen para la educación, cuyos fondos se invierten en otros objetos distintos de la educación; y no se vería el espectáculo bochornoso para el país, como es el de ver que una provincia que no tiene en sus escuelas más de cien ó ciento veinte

Octubre 8 de 1881

CAMARA DE SENADORES

5.ª sesión de prórroga

niños, cobren quince mil fuertes al Gobierno de la Nación para gastos de la educación.

A esto responde el artículo 3.º que está en discusión y de ninguna manera á despojar á los estados federales de las facultades que tienen como tales.

Sr. Figueroa—Pido la palabra.

Es para manifestar que no hay inconsecuencia de mi parte al exigir que se respeten los derechos y facultades acordadas por la Constitución á cada una de las provincias y al pedir que no se les obligue á renunciar esos derechos en favor de la Nación.

Cuando la Constitución prohíbe esto, no hay inconsecuencia al sostener esta doctrina con la de que las provincias pueden algunas veces ocurrir al Gobierno de la Nación pidiéndole subsidios y la misma Constitución así lo prescribe, para aquellas obras que son de gran necesidad en una provincia que no tiene los elementos necesarios.

La Constitución, en uno de sus artículos autoriza al Congreso para acordar subsidios á las provincias cuyos presupuestos de recursos no alcanzan á cubrir sus gastos.

No hay, pues de inconsecuencia en mi modo de proceder si he sostenido que se debían acordar esta clase de subsidios. Así es que deben respetarse los derechos que tiene cada una de las provincias y los privilegios que la Constitución les acuerda.

Ahora la educación primaria pertenece exclusivamente á las provincias; la intervención del Gobierno Nacional no puede ejercerse sobre la educación. Si el Gobierno Nacional contribuye con algunos fondos ó subvención para el fomento de la educación en las provincias, puede intervenir á objeto de ver si se invierten bien ó no los fondos que entrega la Nación. Pueden los inspectores que se crean en las provincias, vigilar si esos maestros ganan y perciben los sueldos que se les ha acordado, pueden vigilar que esos gobiernos de provincia no roben; como lo ha indicado el señor miembro informante de la Comisión, haciendo aparecer á un maestro ganando doble sueldo del que en realidad percibe.

Esto puede vigilarse, sin necesidad

de intervenir en la educación é intervinendo solo en la inversión de los fondos, depando á cargo de las provincias la educación como lo establece la Constitución.

Sr. Lucero—Puede votarse, señor Presidente.

—Se vota el artículo 4.º y es aprobado, pasándose á considerar el artículo 5.º

Sr. Ortíz—Pido la palabra.

Este artículo viene á completar el anterior.

Por la ley de subvenciones se establecía que las provincias, cuando quisieran comprar libros de enseñanza, dirigieran un pedido á la Comisión Nacional de escuelas para que esta con los fondos de escuelas pagara la mitad del valor de los libros pedidos; pero en la práctica, que es donde está la grande enseñanza de todos los gobiernos, los directores de la educación se han apercibido que se cometían muchos abusos y errores que era necesario evitarlos, y á esto responde este artículo.

Efectivamente, se recibió una solicitud por conducto de un librero de esta ciudad para remitir libros á una de las provincias, por valor de veintitrés mil fuertes, sin establecer qué clase de libros eran estos, manifestando que ya había recibido la mitad de esa cantidad.

Esto era negocio entendido con el librero con la mitad de los veintitrés mil fuertes que, con arreglo á la ley de subvenciones, tenía que entregar la Nación, el librero podía pagar los pocos libros que mandase y cumplir los demás encargos de muebles, no de escuelas, sino de otras clases.

De la Provincia de San Luis han venido pedidos por veintisiete mil fuertes; y así por este estilo.

A evitar esto responde el artículo que se ha leído.

En él se establece con perfecto derecho por parte de la Nación, que no puede invertirse ninguna cantidad en compra de libros sin que previamente sepa el Consejo de Educación qué clase de libros son los que se van á comprar por las provincias con la parte que por la ley le corresponde pagar, porque el

Consejo de Educación que está más al cabo de conocer las necesidades de las escuelas y que es el que va á pagar con los dineros de la Nación, debe saber el número de alumnos que cada una de ellas tiene y por consiguiente el número de libros que han de necesitar para el consumo de esos alumnos; y aunque la provincia costee la mitad del importe de los libros que piden, la Nación no debe hacerse cómplice y dar otra mitad por su parte en libros que sirven. Entonces el recurso que les no son útiles ó son perjudiciales ó no queda á las provincias que se crean atacadas en sus derechos federales, es con la mitad comprar libros que mejor les parezca; pero así no arrastrarán á la Nación á gastar otra mitad en comprar libros que tal vez no sirvan.

Es por estas razones que se ha establecido el artículo en los términos en que está.

Sr. Barros—Me parece encontrar alguna deficiencia en este artículo. Así es que voy á proponer al señor miembro informante de la Comisión que acepte que se comprendan en esta disposición los edificios que se hacen para escuelas en las provincias, que también los comprende la ley de 25 de Septiembre de 1871, en la que están en las mismas condiciones que la compra de mobiliario.

Sr. Villanueva—Eso está reglamentado por la ley.

Sr. Ortiz—Este artículo sólo se refiere á la compra de mobiliario.

Sr. Barros—Decía que la Nación como concurre á la compra de mobiliario para las escuelas, también concurre á la construcción de edificios para escuelas en las provincias con la mitad ó tercera parte según los recursos con que cuenta la provincia que lo solicite.

Sr. Gómez—Pero esta ley no enmienda la plana á la otra: la deja vigente como estaba.

Sr. Barros—Proponía esto con el objeto de que la superintendencia pueda inspeccionar y ver si esos edificios también se hacen con arreglo á los planos y presupuestos formulados y para que la Nación contribuya á pagarlos como contribuye á la compra de libros y mobiliario.

Por esta razón hacía esta proposición á fin de que el Consejo de Educación tuviera participación en la inversión de los fondos que la Nación destina para esos objetos del mismo modo que la tiene en los que se invierten para la compra de mobiliario.

Sr. Ortiz—¿El señor Senador propone que la inspección se haga extensiva á los edificios?

Sr. Barros—Sí, señor, para ver si los edificios á cuya construcción concurre la Nación con sus fondos, se hacen con arreglo á los planos y presupuestos formulados.

Sr. Ortiz—Eso está determinado en la ley vigente.

Sr. Villanueva—La ley de subvenciones que está vigente y el decreto del Poder Ejecutivo, reglamentándola, establece precisamente lo que propone el señor Senador: que al hacerse un edificio para escuela en cualquiera provincia, ésta tiene que remitir los planos y presupuestos del edificio, planos y presupuestos que pasan al Departamento de Ingenieros y que son ó no aprobados por el Poder Ejecutivo ó por el Ministro del ramo.

Me parece, pues, que está llenada la exigencia que el señor Senador quería establecer en esta ley. Sería una redundancia volver á decir la misma cosa en la ley.

Sr. Barros—Voy á explicar al señor Senador que yo voy más allá: me refiero á la inspección.

Si efectivamente se cumplen esos contratos con arreglo á los planos que se han examinado, que se han aprobado, no hay nada que observar, pero puede suceder que se presenten planos con arreglo al valor de la propuesta que se hayan hecho, pero que al ejecutarse esos planos no estén conformes á ellos.

Por eso propongo que la inspección se haga en ese sentido, para saber más tarde si la obra está con arreglo al plano que ha sido aceptado y que la Nación contribuye á pagar, como he dicho antes, en igual proporción que para la compra de mobiliario.

Sr. Presidente—¿El señor Senador ha propuesto una adición al artículo?

Sr. Barros—Había propuesto para ver si la Comisión la aceptaba.

Octubre 8 de 1881

CAMARA DE SENADORES

5.ª sesión de prórroga

Sr. Ortiz—La Comisión no la acepta porque es completamente inútil; ya le he dicho al señor Senador que está establecido en la ley; sería repetir un párrafo.

Sr. Baibiene—La previsión del señor Senador por La Rioja es perfectamente fundada; pero las precauciones están tomadas de antemano.

Puede perfectamente suceder que en cumplimiento de la disposición vigente se traigan planos aquí de edificios á construirse y que estando establecidos los presupuestos también, la Nación concorra con la parte que la ley determina para la construcción de esos edificios y suceda lo que con los libros, que no se hagan los edificios, que se dé cuenta de que están construídos y funcionando.

Así es que encuentro que es muy precisa y fundada esta previsión; pero contra ese hecho, ¿qué queda, señor Presidente?

Sr. Gómez—Para eso son los subinspectores.

Sr. Barros—No se les da esa facultad por esta ley.

Sr. Figueroa—He oído al miembro informante manifestar que los resultados de la experiencia han hecho dejar á los gobiernos esta facultad de pedir los libros ó pasar las cuentas para que se paguen sin la inspección de la Comisión...

Sr. Ortiz—Yo no he dicho eso; lo que yo he dicho es que la experiencia ha demostrado que esta facultad dada á los gobiernos de provincia, de mandar la mitad del dinero y comprar ellos por medio de sus agentes los libros, haciendo que la Nación les dé la mitad, eso es lo que había tratado de prever por este artículo, porque se ha comprobado por ese expediente que los libros no eran libros comprados.

Sr. Figueroa—Para corregir ese mal resultado, aprovechando la experiencia que tenemos de esa facultad dada á los gobiernos para comprar libros y después girar por la mitad de su valor, yo iba á indicar el mal resultado que ha dado algunas veces la facultad acordada á las comisiones para hacer ellas las compras ó que por su intermedio se determina la clase de obras á comprarse.

Conozco algunas provincias donde se tomó con bastante entusiasmo la fundación de bibliotecas populares. Se formaron varias asociaciones las que debían recoger subscripciones y mandar el producido de ellas á la comisión nombrada por el Gobierno Nacional, la cual compraría libros por un doble valor con lo que pondría la Nación de su parte. Así lo hicieron, pero resultó que la Comisión de aquí en lugar de aceptar las listas que venían de las obras que debía comprar, mandó las que creyó mejores, diciendo: allá no saben elegir los libros. Muchas de esas obras eran en francés, y no había un solo francés en esos departamentos ni quien lo conociera siquiera.

Se trató de la educación; de que las escuelas que debían pedir también algunas obras para la enseñanza; viene aquí la Comisión y se le dice: no, señor, esas obras no son adecuadas, son mejores estas otras, y se les da otras obras que las que viene á pedir, algunas publicaciones que tal vez habría el compromiso de aceptarlas con preferencia.

Con esto no quiero atacar á la Comisión actual, pero quiero señalar algunos peligros.

Sr. Argentó—Ahora se van á subsanar.

Sr. Gómez—Yo creo que el inconveniente que el señor Senador ha hecho presente respecto de las bibliotecas, no lo va á haber respecto de las escuelas, porque los textos para la enseñanza primaria en las escuelas de la Nación obedecen á un plan fijo, están ya determinados. No hay pues este peligro y al mismo tiempo se ataca el mal que ha señalado el señor Senador por Salta, de que el gobierno de La Rioja en un año empleaba veintitrés mil patacones en libros, y el gobierno de San Luis veintisiete mil.

Sr. Lucero—No fué el gobierno de San Luis, fué un Ministro de San Luis que pidió...

Sr. Gómez—Los actos de un Ministro en el ejercicio de sus funciones son por derecho propio actos del gobierno.

Yo puedo asegurar que en la Provincia de San Juan, donde la estadística

arroja un número mayor de niños educándose que en las de La Rioja y San Luis, jamás ha pasado eso. Es un exceso, pues, que se ha manifestado y ante esos males necesario que la ley establezca y determine el modo de hacerlo, sin los inconvenientes, porque no existen, que se han suscitado para las bibliotecas.

Sr. Ortiz—Pido la palabra.

Para agregar algo á lo que he dicho anteriormente, voy á permitirle leer un extracto de la memoria publicada por el superintendente. Dice, hablando de la resolución negativa que dió á algunas solicitudes de libros de que estamos tratando: (leyó).

Sr. Barros—Pido la palabra.

Voy á hacer notar una otra circunstancia para demostrar la razón que tengo sobre lo que había propuesto para garantizar precisamente los dineros de la Nación. Me parece haber visto publicada en *El Nacional* una nota del señor subinspector pasada al gobernador de Catamarca, en la que demostraba que un texto del señor Alibert, vendido al gobierno de Santiago por veinte o veinticinco centavos, aparecía en la lista de los textos pedidos por el gobernador de Catamarca, por un peso fuerte.

Así pues como estos...

Sr. Figueroa—Un peso fuerte era para Santiago y el de Catamarca lo compró por veinticinco centavos.

Sr. Barros—Perfectamente. Esto mismo puede suceder con los edificios que bajo los auspicios de esta ley se construyan, y puede suceder que se demuestre un plano y un presupuesto con arreglo á él, pero que ese plano no se ejecute y se haga un edificio muy distinto si el Gobierno de la Nación no manda al inspector que por la ley debe mandar á recibirse de esas obras.

Por esta razón justamente había hecho mi indicación para garantizar más, pues que de esto se trata, los dineros de la Nación.

Sr. Villanueva—Si propone la adición el señor Senador yo la apoyo.

Sr. Febre—Pido la palabra.

La observación del señor Senador por La Rioja demuestra de una manera evidente que tanto este artículo co-

mo el anterior no tienen su lugar aquí, porque aquí estamos modificando y corrigiendo la ley de subvenciones, mientras que de lo que se trata es de dictar una ley para organizar el Departamento Nacional de Educación. Todo esto es fuera de lugar aquí, y es por eso que estamos en esta discusión que no viene al caso, señor Presidente, porque hay artículos que no han debido incluirse en este proyecto de ley que estamos discutiendo.

Por eso he votado en contra del artículo anterior y he de votar en contra de éste.

Esta discusión á que nos provoca el señor Senador por La Rioja es á causa de que la Comisión ha incluido estos artículos que son fuera de oportunidad.

Sr. Argento—Hago moción para que se cierre el debate.

—Aprobado.

Sr. Presidente—Se votará primeramente el artículo 5.º, y después la adición propuesta por el señor Senador por La Rioja.

—Se vota el artículo 5.º y es aprobado.

Sr. Presidente—Puede redactar el señor Senador por La Rioja la adición que propone.

Sr. Barros—Un artículo en términos que declaren el derecho de inspección que se tiene á los edificios que se construyan también bajo los auspicios de la ley de 25 de Septiembre.

Sr. Civit—Creo que se necesitan dos tercios de votos para sancionar el ítem.

Sr. Villanueva—Es necesario que se vote algo.

Sr. Secretario—He redactado el artículo en esta forma:

«Igual intervención tendrá el Consejo Nacional de Educación en los subsidios para la construcción de edificios para escuelas.

—Se vota en esa forma el artículo y se aprueba.

—Se pasa á considerar el artículo 6.º

Sr. Ortiz—El objeto del artículo que se discute es derogar las disposiciones anteriores, porque los subinspectores que antes eran pagados la mitad por la Nación y la mitad por las provincias, serán ahora exclusivamente nacionales y dependerán directamente del Consejo Nacional de Educación, al cual suministrarán los datos estadísticos que están encargados de recoger los inspectores provinciales.

Haré notar que uno de los argumentos que se hacía por la prensa atacando esto por su lado económico era decir que la Comisión pretendiendo hacer una economía suprimía el sueldo de los directores ó miembros del Consejo, introducía un gasto mayor creando 14 inspectores ó subinspectores en todas las provincias, que indudablemente venía á importar una suma mayor que el sueldo de los consejeros.

Estos cargos son completamente infundados porque los gastos que hacía la Nación para las provincias en estos subinspectores,—que no cumplían debidamente con los deberes que se les encomendaban, y que no dependían directamente como los actuales de la oficina nacional, ya se hacían, porque antes se pagaban 80 fuertes del Tesoro Nacional á cada uno de los subinspectores provinciales; y así probablemente con el mismo sueldo, tendremos subinspectores nacionales dependientes directamente de la oficina del Consejo Nacional.

Así es que no se viene á gastar más; es el mismo gasto que se hacía antes.

Sr. Presidente—Se va á votar el artículo 7.º

—Se vota y es aprobado.

—El artículo 8.º es de forma. ✓

Sr. Barros—Aunque ha pasado del lugar correspondiente en que debió hacerse esta observación, encontrando una deficiencia en esta ley voy á permitirme proponer á la Cámara agregar otro artículo.

Aquí no se determina con cuánto número de miembros el Consejo puede deliberar.

Por otra parte como hay disposiciones en otras leyes que establecen la obli-

gación de los empleados á sueldo de asistir á una hora dada al despacho, y éstos no la tienen, así como en otros casos á estos empleados *ad-honore* se les ha establecido una multa, yo creo que estos vocales del Consejo debieran tenerla para todos aquellos casos en que tienen que asistir á deliberar en cumplimiento de sus deberes, y no lo hagan.

Esto es lo que quiero que se establezca por el Congreso: siempre que sean citados para un objeto dado y no lo hicieran, se le imponga multa.

Sr. Ortiz—Lo que desea el señor Senador está sancionado en el artículo 4.º

El artículo 4.º dice: El reglamento que se dé fijará la hora de sesiones, etc.

Sr. Barros—Creo que no es materia de Reglamento; se trata de establecer una pena y eso no corresponde al Reglamento.

Sr. Argentó—Esto va á ser un poder aparte.

Sr. Presidente—Creo que no ha tenido apoyo la moción del señor Senador.

—No fué apoyada.

V

Sr. Presidente—El señor Senador por Córdoba había pedido la palabra.

Sr. Moyano—Iba á hacer presente al honorable Senado que aunque el acta presentada por el señor Senador electo por la Provincia de Salta no resulta nada que pueda viciar la elección, la Comisión de Peticiones no se ha podido expedir porque necesita algunos datos del señor Senador doctor Ortiz, para poder hacerlo.

Así es que podríamos suspender la sesión ó pasar á cuarto intermedio con este objeto.

Sr. Figueroa—¿La Comisión cree que puede expedirse en un cuarto intermedio?

Sr. Moyano—Sí, señor.

Sr. Presidente—Entonces pasaremos á un cuarto intermedio.

—Así se hace, continuando la sesión algunos momentos después.